

CONTINUACIÓN DE LA 18ª SESIÓN ORDINARIA, EL 22 DE JULIO DE 1901

PRESIDENCIA DEL SEÑOR BENITO VILLANUEVA

SUMARIO:—Asuntos entrados.—Proyecto de ley del señor diputado Bollini, relativo al pago de afirmados en la Capital.—Aprobación del dictamen de la comisión de negocios constitucionales en un proyecto de ley acordando permiso para aceptar condecoraciones á los ciudadanos Angel Maria Ménlez, D. García Mansilla, C. Calvo, A. Celery y J. A. Baldrich.—Aprobación del dictamen de la comisión de peticiones en el proyecto de ley acordando pensión á la viuda del agente de policía, Rosario Villalba.—Integración de las comisiones de hacienda y de legislación.—Consideración del dictamen de la comisión de legislación en el proyecto de ley de montepío, jubilaciones y pensiones civiles.

DIPUTADOS PRESENTES

Alfonso, Argerich, Astrada, Avellaneda (M. M.), Balaguer, Barraquero, Barraza, Barroclavé, Belde-  
rrain, Benedit, Bernejo, Bertrés, Berrondo, Billordo,  
Bollini, Bouquet, Roldán, Bruchmann, Calderón, Can-  
tón, Capdevila, Carbó, Carlés, Carrasco, Carreras,  
Centeno, Claros, Coronado, Cullen, Dantas, Demaria,  
Echegaray, Ezquer, Falcón, Ferrari, Fourouge, Gálvez,  
García, Garzón, Godoy (M. E.), Gómez (C. F.),  
González, Gouchon, Helguera, Hernández, Iriondo (M.),  
Iriondo (U.), Lacasa, Lacavera, Laferrère, Lagos, Lar-  
tigau, Lassaga, Leguizamón, Loureyro, Machado, Mar-  
tínez, Moreno, Olivera, Olmos, Outes, Palacios, Pabelo,  
Parera (F. M.), Parera (R.), Peña, Pérez, Quintana,  
Roberts, Rosas, Ruiz, Salas, Sánchez, Santa Coloma,  
Santamarina, Seguí, Serna, Silva, Soldatti, Tissiera,  
Torres, Ugarriza, Usandivaras, Varela Ortiz, Vedia,  
Videla, Villanueva, Vivanco, Zavalla.

AUSENTES CON LICENCIA

Argañaraz, Luro, Reyna, Sarmiento, Torino.

CON AVISO

Astrada, Avellaneda (F.), Bosch, Godoy (E.), Morel,  
Romero, Ugarte.

SIN AVISO

Balestra, Bores, Casares, Castellano (A.), Castella-  
nos (J.), Gigena, Gómez (M.), Leiva, Loveyra, Rivas,  
Robert, Yofre.

En Buenos Aires, á 22 de julio de  
1901, reunidos en su sala de sesiones  
los señores diputados arriba anotados,  
el señor presidente declara reabierto la  
sesión, siendo las 3 y 30 p. m.

ASUNTOS ENTRADOS

PETICIONES PARTICULARES

—Frank M. Still solicita privilegio por veinte años para  
la explotación de la pesca en las costas patagónicas  
y en los mares del sur.—(A la comisión de hacienda).

—Romualdo Vega solicita la sanción de una ley  
general que favorezca el establecimiento de refinarias  
de petróleo.—(A la comisión de hacienda).

—Vecinos de la capital federal y de Lomas de Za-  
mora adhieren al proyecto de ley de divorcio y piden  
su pronto despacho.—(A sus antecedentes).

—El directorio del conservatorio de música de Al-  
magro solicita una subvención.—(A la comisión de  
presupuesto).

—Manuel Bernárdex solicita subscripción á la obra  
«De Buenos Aires al Iguaçu».—(A la comisión de peti-  
ciones).

—Arminda Olazábal de Broches solicita pensión.—  
(A la comisión de peticiones).

—Ema y Vicenta Méndez Caldeira solicitan pensión.—  
(A la comisión de guerra).

—Se vota, y resulta afirmativa.

—En seguida se aprueba en general particular el proyecto en discusión

berts y García, sobre jubilaciones y pensiones; y por las razones que en vuestro seno aducirá su miembro informante, tiene el honor de aconsejaros prestéis vuestra sanción al siguiente

## COMISIONES DE HACIENDA Y LEGISLACIÓN

**Sr. Olmos**— Pido la palabra.

La comisión de hacienda, por razones que conoce la honorable cámara, está incompleta, y esto obstaculiza sus trabajos.

Por esta razón, hago moción para que la cámara, como es de práctica, autorice al señor presidente á reintegrarla

—Apoyado.

**Sr. Presidente**— Habiendo asentimiento por parte de la honorable cámara, designo para integrar la comisión de hacienda á los señores diputados Alfonso y Pérez.

**Sr. Argerich**—En las mismas condiciones se encuentra la comisión de legislación: ha quedado vacante uno de los puestos, por renuncia del señor diputado Serú. Así es que hago igual moción, para que sea integrada.

—Apoyado.

**Sr. Presidente**—Habiendo asentimiento por parte de la honorable cámara, designo para integrar la comisión de legislación al señor diputado por San Juan, doctor Balaguer.

**Sr. Olmos**—Me parece que al integrar la comisión de hacienda, ha debido designarse cuál de los nombrados debe reemplazar al señor diputado Villanueva durante este año, y cuál al señor diputado Luro, que está con licencia.

**Varios señores diputados**—Que lo resuelva la comisión.

**Sr. Olmos**—No puede hacerlo la comisión.

**Sr. Presidente**—Que sea en el orden que se ha hecho la designación: el señor diputado Alfonso reemplazará al que ocupa la presidencia de la cámara, y el señor Pérez llenará la vacante dejada por el señor diputado Luro.

## ORDEN DEL DIA

MONTEPIÓ, JUBILACIONES Y PENSIONES  
CIVILES*A la honorable cámara de diputados.*

La comisión de legislación ha estudiado los proyectos de ley presentados por los señores diputados Ro-

## PROYECTO DE LEY

*El senado y cámara de diputados, etc.*

Artículo 1.º Créase una caja nacional de jubilaciones y pensiones para los funcionarios, empleados y agentes civiles de que habla el artículo 2.º

Declarase que los fondos y rentas de esa caja son de propiedad de las personas comprendidas en las disposiciones de la presente ley, y que con ellas se atenderá al pago de las jubilaciones concedidas en virtud de las leyes números 1909, 2219 y 3744 y al de las jubilaciones y pensiones que en lo sucesivo se acuerden en conformidad á la presente.

Art. 2.º Quedan comprendidos en las disposiciones de la presente ley:

- 1.º Los funcionarios, empleados y agentes civiles permanentes de la administración cuyas remuneraciones figuren en el presupuesto anual de gastos de la Nación;
- 2.º Los directores, empleados y demás personal del consejo nacional de educación á que se refiere la ley número 1909;
- 3.º Los empleados del banco de la Nación y de banco hipotecario nacional;
- 4.º Los jubilados existentes, á los efectos del capítulo IV;
- 5.º Los magistrados judiciales, miembros del congreso, presidente y vicepresidente de la República y ministros del poder ejecutivo que á ella se acojan, á condición de que los miembros del congreso y los subsiguientemente indicados hayan prestado, antes de su elección ó nombramiento, veinte años de los servicios á que se refiere el inciso 1.º de este artículo.

Art. 3.º Esta ley no regirá respecto á las remuneraciones siguientes:

- 1.º Las de las personas expresadas en el inciso 5.º del artículo 2.º, cuando no se acojan á la presente;
- 2.º Las de los servicios que sean contratados en virtud de autorizaciones especiales y teniendo en vista la competencia excepcional de las personas, salvo que hubieran contribuido desde su incorporación al servicio á la formación del fondo de la caja con el descuento de que habla el inciso primero del artículo 4.º;
- 3.º Las de los obreros que trabajan por jornal en las obras públicas ó en talleres industriales del estado, salvo aquellos que presten servicio permanente y contribuyan con el referido descuento;
- 4.º Las del personal de la sociedad de beneficencia de la Capital de la República;
- 5.º Las de aquellos que desempeñen comisiones accidentalmente ó por tiempo fijo.

## DE LA CAJA NACIONAL

Art. 4.º El fondo de la caja nacional se formará con las siguientes asignaciones:

- 1.º Con el descuento forzoso del 5 % sobre los

suellos de las personas indicadas en el artículo 2.º;

2.º Con el importe de la mitad del primer mes de sueldo de la persona que por primera vez entra á la administración;

3.º Con la diferencia del primer mes de sueldo cuando alguna de las personas indicadas en el artículo 2.º pasé á ocupar un empleo mejor retribuido que el que antes desempeñaba;

4.º Con el importe de las multas que por cualquier causa se impongan al personal de la administración;

5.º Con el importe de la tercera parte del sueldo de los empleados á quienes se conceda licencia;

6.º Con los intereses de los fondos públicos y renta de otros bienes que la caja adquiriera;

7.º Con el importe de los suellos de los empleos vacantes, salvo que el poder ejecutivo declare por decreto especial que la no provisión obedece á razones de economía;

8.º Con las donaciones ó legados que se le hagan;

9.º Con la renta de diez millones de pesos en fondos públicos de 6 % de interés con que contribuye el estado;

10. Con el importe del fondo acumulado por el consejo nacional de educación en virtud de las leyes números 1420 y 1900, que pasa á formar parte del tesoro.

Art. 5.º La caja nacional será administrada por una junta compuesta de un presidente administrador, designado por el poder ejecutivo con acuerdo del senado, que durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones y podrá ser reelegido; y de dos vocales, que lo serán el presidente de la contaduría nacional y el presidente del crédito público.

Art. 6.º El presidente administrador de la caja nacional podrá ser removido antes del término fijado, á solicitud de la junta de administración, por mala conducta en el ejercicio de sus funciones, por el poder ejecutivo en acuerdo de ministros.

Art. 7.º Faltando el presidente de la junta, sus funciones serán desempeñadas por el presidente de la contaduría nacional.

Art. 8.º La junta de que habla el artículo 5.º estará especialmente obligada:

1.º A velar por la fiel observación de las prescripciones que la presente ley establece para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones;

2.º A cuilar que no continúe en el goce de ella ninguna persona que haya perdido el derecho de percibirla;

3.º A rendir cuenta trimestral de sus operaciones á la contaduría general de la Nación y á publicar cada tres meses el estado correspondiente;

4.º A elevar al ministerio de hacienda, al fin de cada ejercicio económico, una memoria completa sobre la situación de la caja señalando los inconvenientes con que se hubiere tropezado y proponiendo las modificaciones de la ley que la práctica demostrara necesarias, especialmente las que se refieran á la proporcionalidad de los recursos que se acumulen con relación á las erogaciones que hubiesen sobrevenido ó se presuma que deban ocurrir, siempre bajo la base de que los recursos que la presente crea deben por sí solos bastar para llenar sus fines;

5.º A darse un reglamento interno, sometiéndolo á la aprobación del poder ejecutivo.

Art. 9.º La junta de la caja nacional percibirá los

fondos expresados en el artículo 4.º, pagará las jubilaciones y pensiones á que se refiere esta ley; formulará su presupuesto de gastos, que deberá ser aprobado por el poder ejecutivo y atendido con los fondos de la caja; nombrará y removerá el personal á sus órdenes.

Art. 10. En ningún caso podrá disponerse de parte alguna de los fondos de la caja para otros fines que los mencionados en esta ley, bajo la responsabilidad personal de los directores, que se hará efectiva en sus bienes por disposición del poder ejecutivo ó á solicitud de cualquiera de las personas de que trata el artículo 2.º

Art. 11. La caja no podrá atesorar suma en dinero efectivo que no requiera para los pagos corrientes y una reserva prudencial con tal objeto. Todos sus depósitos en dinero serán colocados en el Banco de la Nación.

Art. 12. Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, los fondos de la caja serán invertidos por ésta en títulos de la deuda nacional, de manera que le produzcan el mayor interés y la más frecuente capitalización posibles.

Art. 13. La adquisición ó enagenación de títulos nacionales se hará por llamado á licitación, salvo que la junta por unanimidad resuelva en casos especiales proceder en forma distinta.

Art. 14. Las cantidades que según el artículo 4.º forman el fondo de la caja nacional serán retiradas mensualmente por las cajas nacionales que paguen ó liquiden sueldos y entregadas sin demora á la primera.

Art. 15. Decláranse inembargables los bienes de la caja nacional establecidos por la presente ley.

## CAPÍTULO II

### DE LAS JUBILACIONES

Art. 16. Los funcionarios, empleados ó agentes civiles de la Nación expresados en el artículo 2.º tendrán derecho á jubilación con arreglo á las disposiciones de la presente ley.

Art. 17. La jubilación es ordinaria ó extraordinaria. La ordinaria equivale al 2.70 % del último sueldo multiplicado por los años de servicio del que obtenga su jubilación. La extraordinaria, equivale al 2.40 % del último sueldo multiplicado también por los años de servicio del jubilado.

Art. 18. La jubilación ordinaria se acordará al empleado que haya prestado cuando menos treinta años de servicio y tenga cincuenta y cinco ó más años de edad.

Art. 19. La jubilación extraordinaria se acordará al empleado que después de cumplir veinte años de servicios fuese declarado por enfermedades resultantes del ejercicio de las funciones, física ó intelectualmente imposibilitado para continuar en el ejercicio de su empleo, y al que, cualquiera que fuese el tiempo de servicios prestados, se inutilizase física ó intelectualmente en un acto del servicio y por causa evidente y exclusivamente imputable al mismo.

Art. 20. A los efectos de la jubilación sólo se computarán los servicios efectivos durante el número de años requerido, que hayan sido prestados sin interrupción, salvo lo dispuesto en el artículo 24.

Las interrupciones del servicio ocurridas antes de la promulgación de esta ley que no hayan excedido de dos años y que hayan sido causadas por renuncia del

empleado, no perjudicarán los derechos acordados por la presente, ni se considerará como interrupción del servicio la que sea originada por enfermedad, servicio militar obligatorio ó fuerza mayor debidamente justificada. Pero en ningún caso la duración de las interrupciones se computará como tiempo de servicio prestado.

Art. 21. A los empleados del banco de la Nación ó del hipotecario nacional se les computará los servicios que hayan prestado en el banco nacional actualmente en liquidación.

Art. 22. Únicamente podrán volver al servicio los que hayan obtenido jubilación ordinaria. En ese caso, el jubilado cesará en el goce de la jubilación y percibirá solamente el sueldo asignado al nuevo empleo. Cuando abanlore éste, volverá al goce de la jubilación sin que pueda tener derecho á que le sea aumentada.

Art. 23. No podrá computarse á las personas de que habla la última parte del artículo 19 para determinar el monto de su jubilación extraordinaria un tiempo menor de quince años de servicio.

Art. 24. Los empleados que hubiesen sufrido el descuento establecido en el artículo 4.º durante diez años continuos, renunciaren sus puestos, conservarán el derecho de que les sean computados esos años de servicios para acogerse á los beneficios de esta ley, siempre que en sus renunciaciones constar la reserva correspondiente ó ingresaren nuevamente á la administración dentro de un plazo de tres años, contados desde la fecha de su aceptación. El tiempo transcurrido fuera de servicio no se les computará.

Art. 25. A los efectos establecidos en los artículos 17 y 28, declárase último sueldo el promedio de sueldo mensual que el interesado hubiera percibido durante los últimos cuatro años de servicio.

Para los empleados cuyos emolumentos no sean determinados por el congreso, el último sueldo será el promedio mensual que hubieren percibido en todo el tiempo de servicio.

Art. 26. No se computarán los servicios prestados antes de la edad de veinte años.

Art. 27. Los empleados despedidos por razones de economía ó por no requerirse sus servicios, y los que cesen por cambio de designación en el orden administrativo, ó por las supresiones que se hicieran en los presupuestos anuales ó en leyes especiales, tendrán derecho á reclamar la devolución del 5 % del contenido de sus sueldos, con el interés del 5 % capitalizado por año.

Art. 28. Ninguna jubilación podrá exceder del 95 % del último sueldo percibido.

Art. 29. La jubilación podrá solicitarse, so pena de nulidad, ante la junta de administración, quien, después de llenados todos los trámites, la acordará ó no, elevándola por intermedio del ministerio que corresponda á la aprobación del poder ejecutivo.

Art. 30. Si se solicitase jubilación extraordinaria, la junta de administración, sin perjuicio de las averiguaciones que estime procedentes, se dirigirá al departamento nacional de higiene para que informe sobre las causales alegadas de imposibilidad física ó intelectual.

Art. 31. El derecho acordado por el artículo 18 de esta ley podrá ser ejercido por los maestros de instrucción primaria, las clases y agentes de policía de seguridad y por los jefes, oficiales y tropa del cuerpo de bomberos con veinticinco años continuados de servicios y cincuenta de edad. En este caso la jubilación ordinaria equivaldrá al 32 1/2 % del último sueldo multiplicado por veinticinco.

Art. 32. No tratándose de funcionarios inamovibles, podrá el poder ejecutivo jubilar de oficio á los que se hallen en las condiciones de los artículos anteriores, cuando así lo exija el buen servicio público. En este caso la resolución será tomada con intervención de la junta de administración, audiencia del interesado y en acuerdo de ministros.

Art. 33. Las fracciones de años para el cómputo de servicios se apreciarán por años enteros si alcanzaren á seis meses. Si fuesen menores no serán computadas.

Art. 34. Las jubilaciones concedidas hasta la promulgación de la presente en virtud de lo dispuesto por las leyes números 1900, 2219 y 3744, serán en lo sucesivo pagadas por la caja nacional, con una reducción del 10 % sobre su valor actual.

Art. 35. Cuando un empleado hubiese desempeñado dos ó más empleos en propiedad, al mismo tiempo, la jubilación se acordará sobre el sueldo mayor, sin acumularse el tiempo de los otros ni el sueldo. Exceptuase el caso de los empleos del profesorado, en el cual se acumularán los sueldos á condición de que por lo menos se haya sufrido durante cuatro años el descuento del 5 % en los sueldos de todas las cátedras desempeñadas.

Art. 36. Las jubilaciones serán pagadas desde el día en que el interesado deje el servicio.

### CAPÍTULO III

#### DE LA PÉRDIDA DE LA JUBILACIÓN

Art. 37. No tendrán derecho á ser jubilados:

- 1.º El que hubiese sido separado del servicio por mal desempeño de los deberes de su cargo;
- 2.º El que hubiese sido condenado por sentencia judicial por alguno de los delitos clasificados en el código penal, como «pecuniarios á los empleados públicos», y en general por delitos contra la propiedad ó cualquiera otro que merezca pena de penitenciaría ó presidio;
- 3.º El que no solicitase su jubilación dentro de los cinco años siguientes al día en que dejó el servicio.

Art. 38. La jubilación es vitalicia y el derecho á percibirla sólo se pierde por las causas expresadas en el inciso 2.º del artículo anterior.

Art. 39. La conmutación ó el indulto no harán recobrar los derechos perdidos según los artículos 37 y 38, si la pena ha sido impuesta por delito contra la propiedad ó pecuniarios á empleados públicos.

Art. 40. No podrá reclamar su jubilación el que tenga causa criminal pendiente contra su persona, siempre que se procese por alguno de los delitos expresados en el inciso 2.º del artículo 37. El interesado deberá promover previamente la terminación definitiva del proceso.

### CAPÍTULO IV

#### DE LAS PENSIONES

Art. 41. En los mismos casos en que con arreglo á las disposiciones de la presente ley haya derecho á gozar jubilación y ocurra el fallecimiento del empleado ó jubilado, tendrán derecho á pedir pensión en la proporción y condiciones establecidas en el presente capítulo: la viuda, los hijos y, en su defecto, los padres del causante.

Art. 42. El derecho á gozar de la pensión entre las

personas mencionadas corresponderá en el orden siguiente:

- 1.º A la viuda en concurrencia con los hijos
- 2.º A los hijos solamente;
- 3.º A la viuda en concurrencia con los padres;
- 4.º A la viuda;
- 5.º A los padres.

Los hijos naturales disrutarán la parte de la pensión á que tengan derecho según las leyes comunes.

Art. 43. El importe de la pensión será de la mitad del valor de la jubilación que se gozaba ó á que se tenía derecho por el causante.

Art. 44. Si la esposa del empleado quedase viuda, hallándose divorciada por su culpa, ó viviendo de hecho separada sin voluntad de unirse, ó provisoriamente separada por su culpa á pedido del marido, no tendrá derecho á pensión; pero las demás personas llamadas á obtenerla por esta ley gozarán de ella como si la viuda no existiera.

Art. 45. Siempre que sean varias las personas llamadas á disfrutar de la pensión, si alguna de ellas pierde su derecho á percibirla, la parte que le corresponde acrece á los demás.

Art. 46. Si á la muerte del causante de una pensión quedan hijos huérfanos de distintos matrimonios, la pensión se dividirá por iguales partes entre todos ellos, entregándose á sus respectivos representantes legales.

Art. 47. Para gozar de la pensión la viuda que no hubiere tenido hijos durante el matrimonio con el causante, deberá justificar que ha estado casada con el empleado jubilado cinco años antes del fallecimiento de éste, salvo el caso que existan hijos legítimos ó de que se trate de lo previsto en la última parte del artículo 49. En este caso, bastará que el matrimonio se haya celebrado antes del accidente allí expresado.

Art. 48. El término máximo de duración de las pensiones será de 15 años, á contar desde el día del fallecimiento del causante, desde cuya época deberán abonarse.

Art. 49. No se acumularán dos ó más pensiones en la misma persona. Al interesado le corresponde optar por la que le convenga, y hecha la opción quedará extinguido el derecho á las otras.

Art. 50. Toda solicitud de pensión se presentará so pena de nulidad á la junta de administración acompañada de los recaudos necesarios para justificar que el postulante se halla en las condiciones de la ley. Estando la solicitud suficientemente instruida, la junta la acordará ó no y la elevará con informe al poder ejecutivo para su resolución definitiva.

Art. 51. Las personas designadas en el artículo 42 tendrán derecho á que se les liquide el importe de un mes del último sueldo del empleado fallecido sin dejar derecho á pensión, por cada ocho años que éste hubiera contribuido á la formación del fondo de la caja nacional.

#### EXTINCIÓN DE LAS PENSIONES

Art. 52. El derecho á pensión se extingue:

- 1.º Para la viuda, desde que contrajere nuevas nupcias;
- 2.º Para los hijos varones, desde que llegasen á la edad de veinte años;
- 3.º Para las hijas solteras, desde que contrajesen matrimonio ó cumpliesen treinta años de edad;
- 4.º En general, por vicia deshonesta, vagancia, por domiciliarse en país extranjero, ó por haber sido condenado por delito contra la propiedad ó á las penas de presidio ó penitenciaria.

#### DISPOSICIONES GENERALES

Art. 53. Las pensiones concedidas hasta la fecha de la presente ley seguirán abonándose por la ley de presupuesto general, reducidas en un 10 % de su valor.

Art. 54. Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley número 3195, las cámaras deberán fijar con el voto de las tres cuartas partes del total de los miembros de cada una, el día en que hayan de tratarse las solicitudes ó proyectos sobre pensiones gratificables mayores de cien pesos. Sin este requisito previo, serán nulas las pensiones que se acuerden y su importe no podrá ser liquidado por la contaduría nacional.

Art. 55. Las jubilaciones y pensiones son inalienables. Será nula toda venta ó cesión que se hiciere en ellas por cualquier causa.

Los jueces sólo podrán decretar el embargo de la cuarta parte de ellas, pero si la pensión correspondiese á varias personas, se embargará solo la cuarta parte de lo que deba percibir el deudor embargado.

Art. 56. Los comprobantes con que se debe justificar el derecho para optar á jubilación ó pensión, serán los mismos que se requieren por las leyes comunes para la adquisición en derechos.

Art. 57. En el caso de que la junta de la caja nacional no haya acordado una jubilación ó pensión, el poder ejecutivo, oído el procurador de la Nación, resolverá el caso en acuerdo de ministros.

Art. 58. No se computarán á los efectos de esta ley los servicios prestados en las municipalidades ó en las administraciones de provincia, ni tampoco los desempeños en el ejército, cuando éstos sean retribuidos con retiro militar.

Art. 59. El poder ejecutivo podrá suspender por el tiempo que juzgue necesario la concesión de nuevas jubilaciones y pensiones en el caso de que los recursos de la caja nacional no fuesen suficientes para atenderlos, dando inmediatamente cuenta al congreso y promoviendo la revisión de la presente ley.

Art. 60. Esta ley regirá desde su promulgación, y al reglamentarla el poder ejecutivo dispondrá lo conveniente para que inmediatamente funcione la caja nacional creada por la presente.

#### DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1.º El consejo nacional de educación transferirá á la caja nacional de jubilaciones y pensiones el fondo que haya acumulado para los efectos de la ley número 1909.

Art. 2.º Las personas indicadas en el inciso 5.º del artículo 2.º que se acojan á la presente deberán ingresar á la caja el importe del descuento del 5 % de que habla el artículo 4.º, que les hubiera correspondido efectuar desde el 1.º de enero de 1901.

Art. 3.º El poder ejecutivo ordenará que durante el año 1902 se levante un censo de los empleados comprendidos ó que puedan acogerse á los beneficios de la presente ley.

Art. 4.º Deróganse to las leyes y disposiciones que se opongan á la presente.

Art. 5.º Comuníquese al poder ejecutivo.

Salida de la comisión, junio 19 de 1901.

Juan E. Seru.—F. A. Barroetaveña.—  
Félix F. Avellaneda.—Carlos F. Gómez.—F. Helguera.—R. Santamarina.

En disidencia en los siguientes puntos:

Art. 18. Suprimir: «y tenga 55 ó más años de edad».

Añadir: «Este derecho podrá ser ejercitado por los maestros de enseñanza primaria y secundaria, empleados y agentes de las policías de seguridad e investigación, con excepción de los empleados simplemente administrativos; jefes, oficiales y tropa del cuerpo de bomberos; telegrafistas, guardianes y celadores de cárceles con veinticinco años continuados de servicios. En estos casos, la jubilación ordinaria equivaldrá al 3.25 % del último sueldo (artículo 25) multiplicado por 25.»

Art. 19. Añadir: «En este último caso, la jubilación será de las 3/4 partes del sueldo, ajustándose á los preceptos del artículo 25.»

Art. 26. Suprimirlo.

Art. 51. (Nuevo) «por cada cuatro años», en vez de ocho.

*Juan A. Argerich.*

#### PROYECTO DE LEY

*El senado y cámara de diputados, etc.*

### CAPÍTULO I

#### CAJA DE AHORROS Y SUS RECURSOS

Artículo 1.º Créase una caja para la formación y administración de fondos destinados á pensiones de empleados civiles, con sujeción á las reglas que á continuación se establecen, la cual se denominará «caja de ahorros de empleados civiles».

Art. 2.º Los recursos que la formarán serán los siguientes:

- 1.º El descuento de un 5 % que se hará á todos los empleados civiles de la Nación, de sus respectivos sueldos;
- 2.º La economía que resulte del tiempo que se hallen vacantes algunos de los establecidos en el presupuesto, siempre que el trabajo del empleado á que corresponda se verifique por los de las mismas oficinas;
- 3.º Las multas por inasistencia no justificada que deberán imponer los jefes de oficina, con arreglo á las disposiciones que dictará el poder ejecutivo;
- 4.º La diferencia de sueldo de un mes, entre el que goza el empleado ascendido y el que le corresponda en virtud de ascenso;
- 5.º El 25 % del valor de todo comiso ó multa, que que se declaren ó apliquen por los funcionarios civiles, de acuerdo con las leyes y disposiciones vigentes;
- 6.º El fondo existente en la caja, perteneciente al empleado que fuera destituido por dolo ó fraude de los intereses fiscales, debidamente comprobados;
- 7.º El fondo existente en la caja, perteneciente al empleado que deje voluntariamente el servicio antes de los 10 años de la fecha en que se ponga en vigencia esta ley;
- 8.º Los beneficios que produzca la inversión de los fondos de la caja, como lo establece el artículo 4.º;
- 9.º Los beneficios que correspondan á un empleado

contribuyente de la caja, fallecido sin herederos forzosos;

10 El uno por ciento de las rentas generales que se destinen á dicho objeto;

11 El descuento de 4 % de las pensiones que se paguen conforme á esta ley;

12 El descuento ó reserva del 5 % que se hará de los beneficios que se distribuirán entre los empleados contribuyentes, según el artículo 23.

Art. 3.º El poder ejecutivo dictará las medidas necesarias para que la tesorería y demás oficinas pagadoras hagan los descuentos y entreguen mensualmente á la «caja de ahorros» los fondos fijos mencionados en el artículo anterior, y los eventuales inmediatamente que se perciban.

Art. 4.º Los fondos de la caja de ahorros serán empleados:

- 1.º En descuento de letras de tesorería;
- 2.º En títulos de renta pública;
- 3.º En adquisición de expedientes liquidados á cargo del tesoro nacional;
- 4.º En adelanto de fondos sobre los mismos;
- 5.º En préstamos á empleados, reembolsables por quinta parte de sus sueldos; y
- 6.º La existencia en efectivo será siempre colocada en depósito á premio en el Banco de la Nación.

Art. 5.º El máximo de premio ó beneficio que cobrará la caja será:

- 1.º Por la adquisición de los créditos liquidados, un diez por ciento sobre su valor efectivo;
- 2.º Por los adelantos sobre los mismos, dos por ciento mensual; y
- 3.º Por los préstamos á empleados, el mayor interés que cobren los bancos en la capital.

Estos préstamos no podrán exceder jamás de la suma equivalente á cuatro mensualidades del sueldo, que, según el presupuesto, goce el empleado entonces.

Art. 6.º Los créditos de la caja de ahorros quedan exentos de todo secuestro, y deberán destinarse exclusivamente á los objetos determinados por esta ley.

Todo funcionario que ordene, ó les dé otra inversión, será personalmente responsable de su valor é intereses.

### CAPÍTULO II

#### ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA DE AHORROS

Art. 8.º La caja de ahorros será administrada por un directorio, compuesto de un administrador general que lo presidirá, de un contador y un tesorero, bajo la dependencia del ministerio de hacienda.

Dichos empleados serán nombrados por el poder ejecutivo y gozarán del sueldo que les asigna el presupuesto.

El directorio se renovará cada año por terceras partes, pudiendo ser reelegidos sus miembros.

Art. 9.º Además de los libros que requiera la administración general de la caja, se llevará uno especial de cuentas corrientes, en que se abrirá la que corresponda á cada empleado contribuyente, á cuyo haber se acreditarán las cantidades recibidas por el descuento del cinco por ciento de sus respectivos sueldos, cargándose en el debe lo que adeudase á la caja de ahorros por cualquier causa.

Art. 10.º Anualmente se formará un balance general de la caja de ahorros, y cada trienio otro especial de los beneficios que deberán distribuirse entre los em-

pleados contribuyentes según lo determina el artículo 23.—Esos balances, con el conforme del inspector *ad-hoc* que nombre el poder ejecutivo y aprobación del ministerio de hacienda, se publicarán por la prensa.

Art. 11. La caja de ahorros hará sus pagos mensuales y trienales a los pensionistas y empleados contribuyentes, previas sus liquidaciones correspondientes, visas por la contaduría general y aprobadas por el ministerio de hacienda.

Art. 12. El poder ejecutivo determinará el régimen de la administración de esa oficina, simplificándolo en todo lo posible; y proveerá los medios de vigilancia é inspección convenientes para el control de todas las operaciones y procedimientos.

### CAPÍTULO III

#### DE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS

Art. 13. Todos los empleados civiles de la Nación que hubiesen contribuido con sus erogaciones á la formación de la caja de ahorros, con sujeción á esta ley, tendrán derecho, en los casos y condiciones que ella establece, al goce de una pensión por jubilación y de una parte proporcional de los beneficios ó utilidades que reporte la caja de ahorros, ó a pensión para su familia en caso de muerte.

Estas pensiones no excederán jamás de la mitad del sueldo que gozare el empleado al tiempo de su jubilación ó fallecimiento.

Art. 14. Para adquirir pensión por jubilación se requiere que el empleado contribuyente reúna las condiciones siguientes:

- 1.º Tener sesenta años de edad y 30 ó más años de servicio efectivo continuado; ó 2.º hallarse imposibilitado por enfermedades físicas adquiridas por causa del servicio, y haber servido en empleos civiles por lo menos 20 años.

Art. 15. Estas pensiones se acordarán en las siguientes proporciones: 1.º por 20 años de servicio, según queda establecido, la cuarta parte del sueldo del empleado; 2.º, por 30 años, la tercera parte del sueldo; y 3.º, por 40 años, la mitad del sueldo.

Art. 16. Para que las familias de los empleados gocen de pensión por muerte de éstos, se requieren todas las siguientes condiciones:

- 1.º Servicios continuados del causante durante 20 años por lo menos; 2.º, que su fallecimiento ocurra hallándose en el desempeño de su empleo; 3.º que no haya dejado de contribuir con sus cuotas al fondo de la caja de ahorros; 4.º legitimidad del matrimonio ó de la filiación en su caso; y 5.º, residencia en la República de la familia pensionista.

Art. 17. De estas pensiones gozarán solamente las viudas mientras no pasen á segundas nupcias, las hijas hasta la edad de 30 años, mientras se conserven solteras, y los hijos varones hasta la edad de 20 años, siempre que ejerzan algún arte ú oficio, ú otra ocupación honesta, salvo que sean física ó moralmente inútiles.

Por cualquier causa que expire el derecho de pensión para uno ó más miembros de la familia, sus partes se acumularán en los restantes.

Art. 18. No es permitida la acumulación de dos ó más pensiones en una misma persona; y el interesado deberá optar á una de ellas, quedando por este hecho extinguido el derecho á las demás.

Art. 19. Las pensiones para las familias de los empleados fallecidos, se acordarán en esta proporción:

- 1.º Por veinte años de servicios, la cuarta parte del sueldo.
- 2.º Por treinta años, la tercera parte; y
- 3.º Por cuarenta años, la mitad del sueldo.

Art. 20. Toda pensión ó jubilación es personal é intransferible, fuera de los casos establecidos por esta ley, y será nula toda cesión, transferencia ó enajenación que se hiciere de ellas, por cualquier causa que fuese.

Art. 21. Los acreedores de un pensionista tendrán derecho á demandar la cuarta parte de la pensión durante el tiempo que la perciban, y sólo será retenida esa parte por resolución de juez competente.

Art. 22. El derecho á pensión ó jubilación se pierde:

- 1.º Por renuncia voluntaria de empleo;
- 2.º Por destitución del empleado;
- 3.º Por condenación á pena infamante pronunciada por juez competente;
- 4.º Por domiciliarse voluntariamente en país extranjero;
- 5.º Por vida deshonesta; y
- 6.º Por vagancia voluntaria.

Art. 23. Cada tres años se hará una liquidación especial de los beneficios que proporcionalmente correspondan al capital formado por los recursos mencionados en los incisos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º, del artículo 2.º, y la suma que de ellos resulte se distribuirá á prorrata, según su respectivo capital, constituido por el cinco por ciento, descontado de sus sueldos. Esa distribución se hará, siendo previamente aprobada la liquidación por el ministro de hacienda (artículos 9 y 10).

Art. 24. El empleado contribuyente que renunciase voluntariamente á su puesto, después de diez años de servicios continuados, tendrá derecho á que se le liquide la cuenta que se le hubiese formado con sujeción á lo dispuesto por el artículo 9.º, y á que se le abone el saldo de su capital, descontándole lo que adeudara á la caja por préstamo ú otra causa.

Art. 25. El crédito del empleado contra la «caja de ahorros», es personal: no puede ser transferido á terceros; y es nula toda enajenación que se hiciere de ese crédito, bajo cualquier forma ó título que se verificase.

### CAPÍTULO IV

#### DISPOSICIONES GENERALES

Art. 26. La «caja de ahorros» no reconocerá, ni pagará pensión ó jubilación alguna, mientras ellas no sean acordadas por el poder ejecutivo, conforme á esta ley, previos los trámites que el establezca para su ejecución.

Art. 27. Los comprobantes con que debe justificarse el derecho para optar á pensión ó jubilación serán los mismos que se requieren por las leyes comunes para justificarse los demás derechos individuales.

Art. 28. Los plazos y términos para los efectos de esta ley deben computarse desde la época en que ella empiece á tener ejecución, lo que se hará constar por un decreto del poder ejecutivo; y los sueldos del presupuesto vigente de esa época servirán de base para fijar las cuotas de las pensiones y jubilaciones.

Art. 29. Sólo gozarán de los beneficios que esta ley acuerda los empleados que contribuyan con sus erogaciones á la formación del fondo de la caja de ahorros.

Art. 30. Autorízase al poder ejecutivo para regla-

mentar la ejecución de esta ley, y para hacer los gastos que para ello se requieran; debiendo disponer lo conveniente para que empiece á producir sus efectos desde el 1º de enero de 1901.

Art. 31. Quedan derogadas las leyes anteriores en cuanto se opongan á la presente.

Art. 32. Comuníquese al poder ejecutivo.

Buenos Aires, mayo 16 de 1900.

*Teófilo García.*

#### PROYECTO DE LEY

#### *El senado y cámara de diputados, etc.*

Artículo 1.º Los empleados civiles de la Nación tendrán derecho á jubilación después de treinta años de servicios en plazas efectivas, según las disposiciones de la presente ley, salvo lo que disponen los artículos 3, 4, 7 y 8.

Art. 2.º El monto de las jubilaciones se determinará teniendo en cuenta el último sueldo del empleado con más dos años de permanencia en el empleo respectivo, ó el sueldo que tenía con dos años de anterioridad cuando la permanencia en el último empleo no alcanzase á los dos años expresados. Se tomará la treintaava parte de ese sueldo y se multiplicará por los años de servicio.

Art. 3.º Serán jubilados por excepción los empleados que después de cumplidos diez años de servicios fuesen declarados física ó intelectualmente imposibilitados para continuar en el ejercicio de su empleo, en cuyo caso la jubilación será de la cincuentaava parte de su sueldo por cada año de servicio, si el empleado los hubiese prestado por más de 10 años menos de 20 y de la cuarentaava parte, si los hubiese prestado por más de 20 años sin llegar á 30.

Art. 4.º Para los jueces, comisarios, subcomisarios, auxiliares, oficiales inspectores, agentes de policía, cuerpo de bomberos, alcaldes, auxiliares guardianes, celadores de penitenciaría, taquígrafos del congreso, telegrafistas, se computará la duración de los años de servicio por una quinta parte más de tiempo del que hayan desempeñado en esas funciones.

Art. 5.º Los servicios serán de años efectivos, salvo lo que establece el artículo anterior, sumándose las fracciones de años, sin tener en cuenta las interrupciones por el tiempo que hubiesen durado.

Art. 6.º Hecho el cómputo general de tiempo, si sobra alguna fracción, se apreciará como año entero cuando esa fracción de tiempo pase de seis meses.

Art. 7.º Cuando un empleado fuese física ó intelectualmente inutilizado por causa evidente del servicio que desempeñaba, tendrá derecho á jubilación, según lo determinan los artículos 2, 3 y 4, en su caso; pero al cómputo de servicios prestados se agregará quince años más como compensación de esa inutilización sin que en este caso perjudique el no haber alcanzado al mínimum de servicios determinados por los expresados artículos.

Art. 8.º Cuando un empleado hubiese desempeñado dos ó más empleos compatibles, se hará el cómputo general de tiempo establecido por los artículos anteriores, y á él se agregará un nuevo cómputo formado por las avas partes correspondientes á los sueldos percibidos en los empleos acumulados multiplicada ésta por los años en que se hubiesen desempeñado.

Art. 9.º Cuando un jubilado entre nuevamente en servicio, gozará de la mitad de su jubilación más el sueldo correspondiente al empleo que desempeñase, pero éste estará sujeto al descuento del 5 % de que habla el inciso 1º del artículo 32.

Art. 10. El sueldo de los empleados que no tuviesen derecho á jubilación y que cesaren por disposición de la ley ó del poder ejecutivo corre hasta un mes después de su cese, cuando éste no fuese originado por renuncia ó destitución fundada en mala conducta ó mal desempeño de los deberes de su cargo. Esta compensación será á cargo del tesoro de la nación.

Art. 11. El derecho se pierde por haber sido condenado por juez competente como autor ó cómplice de un delito contra la propiedad, ó cualquier otro que merezca pena de penitenciaría ó presidio, ejecutado durante su cargo ó con relación á éste, ó cuando fuese destituido por mal desempeño de los deberes de su cargo.

Art. 12. Las jubilaciones serán acordadas desde el día que el empleado deje el servicio, y no podrán ser cedidas ni embargadas sino hasta su cuarta parte.

Art. 13. Es requisito indispensable para el cómputo de los años que se devenguen en adelante haber sufrido el descuento que se establece en el capítulo III. Los años anteriores serán computados aún sin haber sufrido el expresado descuento, cuando desde la promulgación de la presente ley se hubiese cargado con el descuento que ella ordena.

Art. 14. Es obligatorio el descuento á que se refiere el artículo anterior, para todos los empleados civiles de la administración nacional. Los jueces ó funcionarios cuyos sueldos no deben ser disminuídos, según lo establecido por la constitución nacional, optarán por los beneficios de la presente ley, desde su promulgación para los en el actual ejercicio, y desde la fecha de su nombramiento, para los que en adelante ejerciesen esas funciones.

Art. 15. Los empleados que fuesen nombrados ministros del poder ejecutivo, ó fuesen elegidos miembros del honorable congreso, podrán no interrumpir su tiempo para tener derecho á jubilación, sufriendo el descuento de que habla el artículo 3º, mientras permanezcan en esas funciones.

Art. 16. Los actuales jubilados, en virtud de las disposiciones de la ley número 2219, podrán en el término de un año, desde la promulgación de la presente, optar por sus beneficios; pero en este caso sufrirán un nuevo cómputo de servicios, de acuerdo con las prescripciones establecidas en los artículos 1 al 9 de la presente, y sufriendo sobre cómputo el descuento de que habla el artículo 32.

Art. 17. Mientras no hayan sido resueltas las jubilaciones de que habla el artículo anterior, continuarán siendo abonadas con los fondos ordinarios fijados por el presupuesto general.

Art. 18. Los actuales jubilados que no optaren por los beneficios que acuerda la presente ley, continuarán disfrutando su jubilación, hasta su extinción natural, siendo servidos con los fondos que al efecto destine la ley de presupuesto general.

#### DE LAS PENSIONES

Art. 19. Los jubilados y empleados que tuvieran derecho á jubilación, según las prescripciones de la presente ley, transmitirán el derecho á pensión á sus familias, según lo establecen los artículos siguientes.



Art. 20. Las personas con derecho á pensión son: la viuda, los hijos y, en su defecto, la madre, el padre y hermanas solteras del causante que tuviesen necesidad de los alimentos.

Art. 21. El derecho de gozar de la pensión entre las personas mencionadas, corresponderá en el orden siguiente:

- 1.º A la viuda en concurrencia con sus hijos;
- 2.º A los hijos solamente;
- 3.º A la viuda en concurrencia con los padres;
- 4.º A la viuda;
- 5.º A los padres;
- 6.º A los hermanos.

Art. 22. Cuando hubiera hijos naturales, éstos disfrutarán la parte de la pensión proporcional a la parte que por la ley civil les es permitida heredar.

Art. 23. Si la viuda se encontrase divorciada por su culpa, en virtud de sentencia de autoridad competente, no tendrá derecho á pensión.

Art. 24. A medida que para alguno de los deudos expire el derecho á pensión, se acumularán éstos á los restantes.

Art. 25. Si al fallecimiento de un jubilado ó pensionista quedaran hijos de varios matrimonios y no les conviniese vivir al lado de la viuda, la pensión se dividirá en tantas partes como individualidades tengan derecho á ella.

Art. 26. El derecho á pensión se extingue:

- 1.º Para la viuda ó madre viuda, desde que contrajese nuevas nupcias;
- 2.º Para los hijos varones, después de cumplidos los 18 años.
- 3.º Para las hijas solteras, desde que contrajesen matrimonio.

Art. 27. El término de duración de las pensiones será de 20 años, á contar desde el día del fallecimiento del causante.

Art. 28. No se acumularán dos ó más pensiones en las mismas personas. Al interesado corresponderá optar por la que más le convenga, y hecha la opción, quedará extinguido el derecho á las demás.

Art. 29. Todo jubilado ó empleado civil que fallezca, aunque sea sin dejar derecho á pensión, tendrá derecho á que se le liquide á favor de su viuda ó hijos, una paga sin cargo, que servirá á auxiliarlos en los gastos originados por la defunción.

Art. 30. Las pensiones se regularán por la jubilación que tenía ó correspondía al empleado al tiempo de su muerte, deduciendo una tercera parte.

Art. 31. Cuando un empleado falleciese en servicio por causa evidente y exclusivamente imputable al mismo tiempo, tendrá derecho á que el computo que ha de regir para regular la pensión que corresponda á su familia, según lo dispuesto en el artículo anterior, sea aumentado en quince años más.

#### DEL MONTEPIO, SUS FONDOS Y SU ADMINISTRACIÓN

Art. 32. Para servir las jubilaciones y pensiones creadas por esta ley establécense la caja del monte-pio civil, con los siguientes elementos:

- 1.º Un descuento sobre el sueldo de todos los empleados civiles de la administración que será: de 5 % para los de 100 \$ y menores, y que se aumentará progresivamente en 1/2 % más por cada 100 \$ de aumento;
- 2.º Un descuento de 5 % á los actuales jubilados

que se acogiesen á los beneficios de esta ley, y para todos los empleados que se jubilarán en adelante;

- 3.º De la diferencia de sueldos, durante un mes en los casos de ascensos;
- 4.º De las multas que se impongan al personal civil por inasistencia á sus empleos ú otras causas;
- 5.º De la tercera parte de los sueldos de los empleados á quienes se concediesen licencias;
- 6.º De los sueldos vacantes en el presupuesto, por no haberse llenado en tiempo los respectivos empleos, salvo que el poder ejecutivo declare por decreto especial que la no provisión se hace por causa de economía.

Art. 33. Los sobrantes que produzcan las rentas de monte-pio, después de efectuados los servicios á que están afectadas, servirán á formar un fondo de previsión que se acumulará con los respectivos intereses.

A este efecto, la comisión administrativa del monte-pio civil invertirá anualmente este sobrante en la adquisición de fondos públicos nacionales, que depositará en el banco de la nación, á su orden.

Art. 34. La caja del monte-pio civil será administrada por una comisión compuesta del presidente de la contaduría general, director general de correos y telégrafos y jefe de la policía de la capital, mediante reglamentación del poder ejecutivo. Percibirá los fondos de sus estatutos; los depositará en el banco que sirva de caja al estado; hará los pagos de las jubilaciones y pensiones que se concediesen; nombrará los empleados que en la reglamentación del poder ejecutivo se hubiesen fijado para su servicio y los abonará con los fondos del monte-pio; interviendrá como asesor en cada caso de aplicación de la presente ley; llevará la estadística correspondiente y archivará, bajo su custodia, los expedientes que sobre la materia se producen.

Art. 35. La comisión administrativa encargada de la caja de monte-pio dará al poder ejecutivo cuenta anual de su administración, señalando los inconvenientes en que se hubiese tropezado y proponiendo las modificaciones que la práctica hubiese demostrado necesarias.

Art. 36. Los fondos del monte-pio no podrán, bajo concepto alguno, ser desviados del objeto para que han sido creados, bajo la responsabilidad de la comisión directiva.

Art. 37. La contaduría general de la nación practicará mensualmente y de oficio á favor de la expresada comisión, los descuentos y liquidaciones necesarios para dar cumplimiento á lo dispuesto en los artículos 35 y 36, elevándolas á los respectivos ministerios, para que su pago sea inmediatamente decretado á favor de la comisión administradora del monte-pio.

Art. 38. Las reclamaciones sobre jubilaciones ó pensiones, se presentarán ante el poder ejecutivo, con los comprobantes del caso y se tramitarán, aprobarán y resolverán, como un expediente ordinario, notificándose á la comisión administradora del monte-pio, la que podrá hacer notar cualquier irregularidad que, á su juicio, apareciera.

Art. 39. Queda derogada la ley número 2219, correlativa, número... y toda otra disposición que se oponga á la presente.

Art. 40. Comuníquese al poder ejecutivo.

*Florencio Roberts.*

Mayo 18 de 1900.

**Sr. Presidente**—Está en discusión en general.

**Sr. Gómez (C. F.)**—Pido la palabra.

Apenas si puede presentarse, señor presidente, un asunto que merezca mayormente la atención del parlamento argentino. Leyes de esta naturaleza han sido motivo de constantes preocupaciones de la mayor parte de los hombres de estado de todas las naciones que tienen encuenta la inmensa transcendencia que han ejercido en el orden financiero, en el orden económico y del punto de vista moral, las leyes de retiro referentes á los empleados públicos.

La idea de la fundación de una caja de retiro fué presentada hace veinte años á la consideración del congreso argentino por el señor diputado por Entre Ríos doctor García. Desgraciadamente no fué tomada en cuenta y la nación tiene que lamentar las terribles consecuencias de ese descuido del parlamento ó de haber adoptado un sistema completamente erróneo al discutir y adoptar las leyes de jubilaciones vigentes. Me parece que el momento es oportuno. Siempre es tiempo de reaccionar cuando se trata de mejorar la legislación del país. Yo creo, señor presidente, que la principal misión del parlamento en estos momentos, restablecida como está la tranquilidad pública, sin peligros internacionales de ninguna naturaleza, es impulsar el progreso de la legislación, y ninguna materia, lo repito, es mas digna de la consideración del congreso que la que motiva el despacho. Si esta ley se sanciona en el presente año, como se sancionará seguramente, será una de las que influya más poderosamente en el orden económico y financiero del país y en el porvenir de los empleados de la administración.

La comisión hace un acto de justicia recordando al empezar su informe la noble y fecunda iniciativa de los señores diputados García y Roberts. El primero, como lo dejó acordado, fué quien presentó por primera vez este pensamiento, nuevo entonces. El segundo puede, en cierto modo, reclamarlo también como una primicia, porque el proyecto del doctor García había sido olvidado cuando en 1898 el doctor Roberts lo renovó ante el congreso.

Lamenta, sí, la comisión hondamente que no se encuentre ya en el ministerio, para ocuparse de la defensa de este proyecto ante el congreso y ante la opinión

pública del país, una de las personas que después de los autores de la reforma, ha contribuido mayormente á que la comisión de legislación proyectara una ley orgánica y que respondiera realmente á las necesidades del presente y previese las contingencias pavorosas del porvenir.

Me refiero al exministro de hacienda señor Berduc, que estaba realmente apasionado con este proyecto, si es que cabe apasionarse por la cosa pública, porque él se ha ocupado preferentemente de las necesidades del país sobre esta cuestión, y le atribuía, con mucha razón, toda la importancia que tiene para librarlo de las pesadas, terribles, funestas cargas que en el porvenir va á demandar á la nación el servicio de las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos.

Pero si él no está presente, tendré ocasión, dentro de muy breves momentos, de repetir á la cámara lo que advirtió al parlamento en su gran mensaje sobre el presupuesto del año próximo pasado, en que dedicó un capítulo muy importante á la materia que está sometida á la discusión del parlamento.

Me he referido, señor presidente, á la importancia, á la transcendencia que estas leyes revisten en todas partes del mundo. Su importancia todos los señores diputados la comprenden; no tengo necesidad sino de referirme á un folleto que tengo á la mano, publicado por uno de los autores de proyectos, en el cual se asegura que la nación tendrá que gastar en treinta años para atender el servicio de pensiones y jubilaciones: 192.232,611 pesos, según los cálculos verificados por el contador de la nación señor Belín Sarmiento, cálculos que yo reputo bajos, como lo demostraré cuando me ocupe de refutar los argumentos expuestos para demandar á la nación una ley completamente liberal. Los reputo bajos, porque adolecen del gran defecto de tomar en cuenta un número exiguo de jubilados en el período de treinta años, á contar desde el presente.

Decía que en todas partes del mundo se ha atribuido á esta materia la más grande transcendencia, porque basta preocuparse un momento de buscar antecedentes, de traer opiniones al debate, de revisar cualquier diccionario de economía política ó de finanzas, en sus datos sobre legislación comparada, para comprender que lo mismo en Francia, que en Italia, en España, que en Ale-

mania y en Inglaterra, la constante preocupación de los hombres de estado sobre esta materia ha sido librar á la nación de la pesada carga de las pensiones y jubilaciones, al mismo tiempo que velar por el porvenir de los empleados públicos.

En nuestro país, cuando el señor diputado doctor Yofre presentó á la consideración del congreso la ley de jubilaciones vigente, no fué tratado el proyecto inmediatamente y el poder ejecutivo de la nación, entonces y después, en mensajes repetidos, ha estado siempre advirtiéndolo al parlamento el gravísimo peligro de que una legislación demasiado liberal ó imprevisionaria hiciera imposible en el porvenir la marcha financiera de la nación ó hiciera abandonar por completo el sistema de pensiones y jubilaciones para los empleados públicos.

Entre los mensajes más notables que he encontrado revisando los antecedentes argentinos, está el del año 1887, que voy á permitirle leer en parte, porque es uno de los antecedentes en que la comisión se basará para las deducciones que hará después, porque realmente es un mensaje todo previsión, toda claridad, que en su conjunto estudiaba á fondo la materia y advertía al congreso los peligros de una legislación liberal sobre esta materia.

Decía el poder ejecutivo:

«El honorable congreso ocupa una parte relativamente grande del tiempo de sus sesiones en discutir estas cuestiones que responden en muchos casos á un interés individual no justificado.

«El pueblo ve diariamente en las crónicas parlamentarias la larga lista de solicitudes y la no menos larga de concesiones, alarmándose cada día con el incremento de compromisos para el erario público.

«Las naciones todas de la tierra han pasado por tales enfermedades económicas, pero esta observación que puede apuntarse como dato histórico, no puede invocarse como justificación de nuestra actualidad, pues lejos de serlo, muestra que su intensidad ha sido una causa de reacción benéfica tras de los males que el abuso engendró.

«Estos hechos señalan el malestar producido y las lamentables catástrofes económicas acarreadas por un elemento que, basándose en una falta de equidad, entraba como el factor importante de una desmoralización social, y, finalmente, de un desequilibrio económico.

«La historia de la hacienda pública de todos los países muestra que allí donde en esta materia se ha llegado al abuso, la época en que esto sucedía era predecesora de otra de decadencia para la nación que no supo tomar á tiempo medidas salvadoras.

«Son particularmente afectadas de este mal que analizo, algunas naciones de origen latino (¡ya lo creo!)... y no será avanzado indicar que nuestras repúblicas se hallan regularmente predispuestas á dejar propagar tan funestos gérmenes de perturbación social.

«Se puede decir, en general, que toda pensión que contribuye á debilitar la producción nacional; que quita aliciente para el trabajo á grupos más ó menos grandes de ciudadanos; que, dando alimento seguro á familias enteras, sin exigir de ellas esfuerzos para luchar por la subsistencia, crea gremios consumidores que no devuelven á la nación la savia que reciben de ella; que fomenta la inacción, dejando vacíos en la vida, que se llenan con estériles ocupaciones, cuando no con vicios que la falta de trabajo hace nacer; que influye en el resto de la población no estipendiado por el gobierno, presentándole el ejemplo pernicioso de una vida asegurada en cambio de una desocupación permanente;—que quita los bríos naturales en virtud de los cuales cada ciudadano trabaja por la gloria de la patria y por el bienestar general;—que sujeta al pensionista, y por su intermedio á otros ciudadanos, á la presión de los gobiernos, manteniéndolos dependientes de las oscilaciones de la hacienda pública y temerosos de todo cambio, aunque en él vaya envuelta la suerte del país;—que es, en resumen, un elemento de desmoralización indirecta, y crea parásitos sociales, mantenidos en la ociosidad por el resto de la población laboriosa;—que establece una exacción incua sobre esa parte de la población obligada á producir no sólo lo que necesita para mantener su vida y responder á los gastos de la administración, sino también un suplemento para formar el presupuesto destinado al pago de las pensiones;—y que forma, en fin, grupos privilegiados dentro de la población, cuyo bienestar relativo fomenta ideas de antagonismos y de malquerencia entre los que trabajan y los que no trabajan,—ideas que refluyen en contra de la administración pública, á la que se considera como responsable de esa desigual repartición de beneficios.

»Vuestra honorabilidad comprenderá que sería fácil seguir más adelante en la enumeración de los males directos é indirectos que fluyen del sistema de las pensiones; pero basta lo expuesto para llenar los propósitos del poder ejecutivo, siendo de notar que si esto puede decirse aún de las pensiones justas y basadas en ley, todo ello extendido y más intensamente acentuado puede aplicarse á las pensiones graciabiles.

»El poder ejecutivo, justamente alarmado ante tal estado de cosas, y teniendo que responder al país de la renta pública tan gravemente afectada y de los altos intereses morales de la comunidad, ha creído, pues, llegado el momento de llamar la atención de vuestra honorabilidad sobre este tópico y pedir, como lo hace, la pronta sanción de una ley que mitigue, á lo menos, los efectos del mal que dejo apuntado.»

Esto sucedía en 1887, señor presidente, y podría reproducirse hoy con mucha más razón, como lo reprodujo el año pasado el poder ejecutivo, si se tiene presente que la cifra de las pensiones y jubilaciones, según lo demuestra el anexo J del presupuesto del corriente año, asciende á más de cinco millones de pesos al año.

Me parece que es el momento de que la comisión llame la atención sobre un fenómeno que ha visto con dolor que se está operando en este momento en cierta parte de la opinión del país.

El señor diputado por Buenos Aires, doctor Bermejo, á quien el congreso debe una de las grandes iniciativas, la ley conocida por «ley Bermejo», del año 94, me hacía, al entrar al recinto, una observación en que la comisión ya había pensado; él me decía: el año 98, cuando se modificó la ley del 87, hubo una reacción en la opinión pública en contra de las facilidades para obtener el retiro que daba la ley del 87, que no señalaba edad para conseguir jubilación á los empleados públicos, que permitía el cómputo doble y de año y medio por uno á gran parte del personal de la administración, lo que había traído una gran perturbación en el sentimiento público y amenazaba tomar proporciones inmensas; el año 98, decía, se produjo una reacción en la opinión pública, para que se modificara la ley del 87.

Todavía me acuerdo, señor presidente; fué una sesión memorable: el señor ministro de justicia, pronunció uno de sus grandes, elocuentes y más honrosos discursos para el parlamento y pa-

ra él, á nombre del poder ejecutivo.

El señor diputado por San Luis, doctor Daract, cuya ausencia del parlamento no ha de ser jamás bastante lamentada, porque era un hombre de pensamiento y de gobierno, pronunció también entonces un discurso que arrastró el voto de la cámara, informando á nombre de la minoría de la comisión, y la cámara votó la edad de sesenta años para admitir el retiro á los empleados públicos, y suprimió—entonces yo creía que para siempre—el cómputo doble y de un año y medio por uno.

Hoy se advierte el fenómeno contrario, señor presidente, yo no sé por qué. La comisión ha guardado silencio, obligada á esperar el momento en que fuese llamada á demostrar en el parlamento las razones de su dictamen; pero la verdad es que esa reacción se ha producido con motivo de la propaganda de los empleados, que han interesado á su favor á la prensa de la capital de la República, y que se siente, no sé si hasta en el seno de la cámara. Ojalá que así no fuera, señor presidente! La comisión ha estudiado el asunto profundamente y está segura de convencer á la cámara, de convencer al país y de torcer los rumbos de la opinión pública; está segura de que va á demostrar plenamente ante el parlamento, que no se puede ir más allá de donde va el proyecto, sin grave peligro de sancionar una ley de quiebra.

No se ha publicado en los diarios de la capital, generalmente tan bien informados, cuya opinión, como la de todos los demás que combaten este proyecto de ley, yo quiero creer que es sincera, no se ha publicado, digo, un solo artículo que tenga el más mínimo fundamento. Ayer mismo leía en uno de los diarios de mayor popularidad de Buenos Aires, que combatía el dictamen de la comisión porque suponía que el obliga á los empleados inutilizados en el ejercicio de sus funciones, á tener la edad de sesenta años, para poder acogerse á los beneficios de la ley, cuando es precisamente lo contrario.

La ley proyectada por la comisión es una ley tan liberal, la más liberal de todas las que existirán, si el proyecto llega á sancionarse, que puede decirse que toma al empleado como un padre á un niño, desde su cuna, lo mantiene toda la vida, se inutilice ó no y llegado á la edad que la ley fija para ello, lo jubila; y todavía, después de muerto, continúa protegiendo á la fa-

milia por un largo espacio de tiempo.

Por eso digo que sin siquiera conocer el despacho de la comisión, ó al ménos sin estudiarlo, la prensa de esta Capital ha estado extraviando á la opinión pública, presentando á la comisión de legislación como una especie de arpía, que se complacía en proyectar una ley completamente contraria á los intereses de los empleados, una ley injusta y realmente avarienta.

Me refería, señor presidente, á la importancia y transcendencia de las leyes de esta naturaleza para todos los pueblos, y en apoyo de las ideas que estoy sosteniendo, y que sirven como de preámbulo al dictamen de la comisión, me voy á permitir leer las palabras con que el doctor Bermejo, en 1894, fundaba la ley conocida por su nombre, para evitar que el congreso siguiera dispensando pensiones gratificables, por así decirlo, á la marchanta. «Si queremos además darnos cuenta de la magnitud de lo que esta carga pública representa para el tesoro público y de la manera irreflexiva en que se ejercita esta función atribuida al congreso, basta tener en cuenta que la erogación actual representa 2.411.759 pesos al año; y que vá en camino de aumentar en proporciones extraordinarias, si se tiene presente el movimiento que esta partida ha tenido desde el año de 1888 hasta el momento actual.

En el año de 1888, esta partida del presupuesto importaba 205,064 pesos con 62 centavos.

En el período de cada presidencia, seis años, había aumentado en 284.000 pesos más ó menos, siendo de 489.000 en 1874; de 732.000 en 1880, y de 955.000 en 1886. En 1890, el presupuesto de pensiones y jubilaciones ascendía á 1.688,973 pesos; descendía á 1.664,686 en 1891, para renovar su progresión ascendente de 1.772,600 en 1892; 2.217.000 en 1893, y finalmente, 2.421,750 en el presupuesto actual.

Desde 1886 ha aumentado cada año esta partida del presupuesto tanto como en todo el término de una presidencia en las épocas anteriores».

Cuatro años después de pronunciadas estas palabras proféticas, se puede decir, la situación se ha reaggravado en extremo, pues esa partida sube hoy á 5.358,770 pesos por jubilaciones y pensiones civiles y militares.

Señor presidente: en ninguna parte del mundo los partidos políticos han abusado más de la concesión de pen-

siones militares que en los Estados Unidos, con motivo de la guerra de secesión. A tal punto que en 1893, según el dato que he encontrado en el «Anuario de legislación,» el presupuesto de los Estados Unidos ascendía para las pensiones á 156.740,467 pesos oro sellado.

Parece realmente una enormidad. Sin embargo, dada la población de los Estados Unidos 75.000,000 de habitantes — y la de la República Argentina 4.500,000 habitantes — nosotros hemos alcanzado ya á la mitad, y con relación á la riqueza y recursos que tiene aquel país nosotros estamos mucho más adelantados en materia de gastos de pensiones y jubilaciones que los mismos Estados Unidos.

Véase, señor presidente, si hay que tratar esta cuestión de las jubilaciones con moderación, con prudencia y con sabiduría!

Me ha de dispensar la honorable cámara que la moleste con estas informaciones, que conceptúo necesarias y que tal vez habrían exigido un informe escrito, dada la transcendencia de la materia. La comisión quiere ante todo salvar su responsabilidad ante el parlamento y ante el país, demostrando de un modo acabado que cuando no ha ido más allá, es porque los números, con su elocuencia inquebrantable, no le han permitido sancionar liberalidades mayores que las que presenta en su proyecto de ley.

Me refería hace un momento á la acción que dentro de la comisión había tenido el exministro de hacienda señor Berduc, y como un homenaje realmente merecido á su laboriosidad, á su dedicación y á su talento, me voy á permitir leer los párrafos principales sobre esta materia que contiene el mensaje con que remitió el presupuesto el año pasado.

Dice así: «Pensiones y jubilaciones. — Esta es la carga que más debe preocupar á los poderes públicos de la nación, no sólo por la respetable cifra á que hoy ha alcanzado, sino también por la progresión alarmante que se produce año tras año.

«Tres medios hay de obtener este beneficio del estado: 1º Las pensiones y retiros militares; 2º Las jubilaciones civiles; 3º Las pensiones gratificables, civiles y militares.»

«Desde luego, la suma de \$5.358,370 á que ascienden anualmente las jubilaciones y pensiones como carga de un

país que sólo tiene una población de 4.500.000 habitantes, es enorme.»

»Pero si es alarmante la situación ya creada, ¡cuánto más grave es la que tendremos en breve en la República, si hoy se desdeña afrontar el problema con energía, cualquiera que sea la herida que produzca!»

Después de hacer un estudio y de poner un cuadro sobre el desarrollo de las jubilaciones desde 1884 hasta 1900, dice:

«Y bien: se han jubilado 1146 empleados, á los que se les ha pagado en 16 años más de once y medio millones de pesos, y hoy existen á cargo de la Nación 1086, que costarán en 1901 \$ 1.701,540, ó sea, al mes, 135 pesos cada uno. De modo que en 16 años no han muerto sino 60 jubilados, ó en otros términos, por cada muerto se han jubilado 18.»

Llamo la atención de la honorable cámara sobre este dato, que es muy sugestivo y sobre el que seguramente voy á tener que volver en el curso de este debate, porque aquí se sostiene que la gente se muere joven á montones y que es necesario jubilarla pronto para que goce de la jubilación. Ya se ve, señor presidente; en diez y seis años solamente han muerto sesenta jubilados.

Dice el mensajero: «Llamo la atención de vuestra honorabilidad sobre la gravedad de esta demostración; y si se reflexiona que, en primer lugar, la vigencia de la ley es de diez y seis años; en segundo lugar, que antes de la federalización de esta ciudad el cuerpo de empleados nacionales no era mayor de 3000, no alcanzando á 8000 en 1886, mientras que hoy llega á 24,000; y por último, que á medida que el tiempo avanza es mayor el número de los que llegan al tiempo de servicios que las leyes establecen, no puede mirarse sino con temor el porvenir.

»Podría tal vez pensarse que la reforma de 1898, que exige treinta años de servicios y sesenta de edad para tener derecho á ser jubilado, evitaría el progreso de esta pesada erogación. No. Esa saludable enmienda no ha hecho sino eliminar el abuso en que se había caído acordando jubilaciones á hombres jóvenes, robustos y fuertes; pero no disminuirá con esa el número de beneficiados.»

Después, hablando el señor ministro sobre la ley de 1884, que establece la jubilación para los maestros de instrucción primaria, demuestra con toda exactitud que las previsiones de los

legisladores de esa época han fracasado ante el número considerable de los pensionados. Dispone la ley de 1884 que las pensiones, jubilaciones y retiros acordados á los maestros de instrucción primaria debían pagarse de rentas generales mientras el fondo que se formaba con el descuento que se hacía á los empleados del consejo de educación alcanzara á dar más de 2000 pesos de renta mensual.

Señor presidente: entonces los legisladores previeron que con 24.000 pesos ó un poco más al año, podían atenderse las pensiones y jubilaciones del consejo de educación. ¿Qué es lo que pasó?

Dice el señor ministro: «¿A cuánto ascienden, entre tanto, las jubilaciones en la actualidad, del consejo de educación? ¡A 22.500 pesos al mes, ó sea diez veces más de lo que la ley previó! En otros términos: se debió pedir á cada maestro diez veces más de lo que se le pidió, ó sea, el 20 % sobre el sueldo!

«Resulta, pues, que para pasar á cargo del consejo sus propias jubilaciones, tendrían que quitarse á la instrucción pública 270.000 pesos anuales, suma que iría creciendo hasta determinar la ruina del consejo mismo, como se ha dicho por un distinguido senador.»

Así son todas las previsiones que se hacen en materia de ley de pensiones y jubilaciones en todas partes del mundo, cuando se quieren sancionar leyes liberales: todas fracasan.

Hay otra cuestión también que demuestra la transcendencia de una ley de esta naturaleza.

Me refiero á la influencia que ejerce en las costumbres del pueblo el demostrarle prácticamente las ventajas del ahorro. Esta es una cuestión de actualidad en nuestro país, y ha sido puesta sobre el tapete, puede decirse, por una nota del señor intendente municipal de la capital, en la cual llama la atención de los poderes públicos sobre este grave fenómeno que se ha producido en la capital de la República en los últimos diez años. El país se ha alarmado, señor presidente, al conocer este dato.

Dice así el señor intendente:

»La intendencia municipal de la capital se permite distraer la atención del señor ministro, para ocuparse de una cuestión de alta transcendencia, que interesa por manera grave, material y moralmente, á la vida y al progreso de la población del municipio.

»Me refiero, señor ministro, al desarrollo extraordinario que ha adquirido

el hábito del juego en esta capital. La lotería de beneficencia nacional, creada bajo los auspicios de la ley, de una ley en favor de las clases desheredadas con fines de beneficencia y humanidad, altamente nobles y plausibles, creo que hoy ha llegado á ser un peligro que puede traer profundos males al desenvolvimiento del trabajo y de la economía general.

»Desde la fundación de esta lotería, las emisiones anuales de billetes han ido siempre creciendo, hasta llegar en el año 1900 á la enorme suma de 25.940,000 pesos y alcanzando el valor total de lo emitido desde su creación á 169.950,000 pesos.

»Agréguese á este el monto de lo invertido durante los diez años últimos en los hipódromos, frontones, casas de quinielas, de pelota, de billar y de carreras, y se tendrá el dato asombroso de haberse jugado en ese tiempo la suma de 351.554,307 pesos moneda nacional.»

Señor presidente: el año pasado, cuando la comisión de legislación estudió el proyecto de mi honorable y distinguido amigo el señor diputado por la capital doctor Varela Ortiz sobre las loterías clandestinas, tuvo ocasión de hacer un cálculo prolijo sobre lo que el pueblo de la capital había invertido en loterías clandestinas en los últimos diez años, y con los informes de la lotería nacional y con los que la comisión de legislación se procuró directamente, se llegó á esta conclusión: que sólo en loterías clandestinas el pueblo de la capital había gastado 200 millones de pesos, que añadidos á los 351 de que habla el intendente en su nota, forman la suma de 551 millones de pesos distraída del ahorro del pueblo!

No escapará á la penetración de la cámara el pavoroso problema que presenta esta cuestión.

Yo sostengo que uno de los grandes elementos que las naciones del viejo mundo y los Estados Unidos tienen para haber prosperado y ser verdaderamente grandes, consiste en el ahorro del pueblo.

El pueblo argentino no ahorra, y no ahorra por imprevisión, por falta de educación; de modo que estas leyes que se fundan en el ahorro y en la capitalización de los intereses van, por así decirlo, á hacer entrar por los ojos del pueblo las ventajas y la necesidad del ahorro, porque esta ley descansa en el propósito fundamental de hacer que la nación no siga cargando, sino de un

modo muy pequeño, con el inmenso peso de las jubilaciones y pensiones, y se obtiene en una parte, no muy grande, como lo demostraré después, pero al fin lo suficiente para los comienzos de la reforma, con el descuento de 5 por 100 sobre el sueldo de los empleados.

Señor presidente: la caja nacional de ahorros de Francia tenía en diciembre de 1889, 213.579,699 francos en títulos de la deuda interna y 70.576,877 francos en bonos del tesoro.

La caja postal inglesa, fundada en 1861, tenía en marzo del 90, 1,564.990,475 francos; existían además 380 cajas llamadas *Saving Banks* con 1,125 millones.

Los Estados Unidos, en 634 cajas de ahorro, en trece estados en que la institución está regularmente organizada, tenían 6.000 millones de francos.

La Italia, en la sola caja de ahorro de Milán, con sus 117 sucursales, tenía 280 millones de francos de depósito.

Véase, pues, señor presidente, cuán desarrollado está en esos pueblos el ahorro popular, mientras que en la República Argentina recién se dan los primeros pasos.

De manera, pues, que yo creo que la sanción de estas leyes que van á hacer pensar al pueblo en las ventajas inmensas del ahorro, no deben ser espuestas por el legislador á que fracasen, sancionándolas de un modo muy liberal, porque entonces el argumento sería contraproducente y el pueblo podría convencerse de que nada vale el ahorro, cuando ni siquiera administradas por el estado estas cajas alcanzan su fin primordial por medio de la capitalización y de la mutualidad: el de acumular grandes sumas.

Y luego, señor presidente, á otro de los puntos de que la comisión se ha preocupado mayormente antes de redactar su despacho, es decir, á la dificultad casi insuperable con que tienen que proyectarse estas leyes, sobre todo entre nosotros, en que no hay bases exactas que puedan dar lugar á cálculos realmente fijos y no expuestos á grandes equivocaciones.

El propósito de los proyectos presentados, el que persigue el poder ejecutivo y la idea fundamental de la comisión en esta materia, señor presidente, es que el estado no debe dar más de lo que establece la ley de retiros para el sostenimiento de las pensiones y jubilaciones actuales y del futuro.

La comisión ha tenido que preocu-

parse grandemente por ello, porque á pesar de las gestiones que oportunamente hizo para que se mandara verificar previamente una especie de *enquête* y se levantara un censo nacional de los empleados, no lo ha podido conseguir.

Cuando el año pasado se presentó por primera vez este despacho, que no fué tratado porque la cámara no tuvo tiempo—el despacho se presentó en las últimas sesiones de prórroga—se agregó un artículo por la comisión, disponiendo que durante el año 1901 procediera el poder ejecutivo al levantamiento de un censo de empleados.

Yo me presenté entonces al poder ejecutivo y le pedí que á efecto de que estuviera listo el resultado de ese censo para las sesiones de este año, lo mandara practicar en los meses de enero y febrero; pero el poder ejecutivo, á pesar de la buena voluntad que manifestó cuando la comisión, por mi intermedio, le solicitó esta medida de alta transcendencia para que pudiera discutirse con seriedad una ley de esta naturaleza, no pudo, supongo, realizar su propósito.

La comisión no sabe, ni lo puede saber nadie aquí, cuál es realmente la movilidad del personal de empleados de la administración pública. No se puede calcular tampoco cuál va á ser el personal futuro, porque para convencerse de la inestabilidad y de los cambios que experimenta el personal administrativo en este país, no hay más que pasar la vista por el cuadro número 2 del folleto á que antes hacía referencia, y del cual resulta que en 1880 había 3251 empleados; en 1881, 3300; en 1882, 6500; aumentando sucesivamente hasta el número de 22.716 que suman actualmente los solos empleados civiles del Estado.

Este es uno de los elementos más indispensables: saber calcular más ó menos el movimiento del personal de la administración para tener una base segura sobre qué sustentar los cálculos.

Otro elemento es la edad de los empleados. ¿Qué edad tienen los empleados actuales de la administración?

No hay absolutamente ningún dato; apenas existen á este respecto los censos del 93 y del 94, levantados por el señor Latzina, el último de los cuales no comprende sino 8000 de los 24.000 empleados que entonces existían.

Los años de servicios del personal actual de la administración es un dato importantísimo para poder saber dentro de qué término, más ó menos, se van á poder jubilar y el *quantum* de la jubilación.

De manera que estos cuatro datos: la movilidad de los empleados, el personal futuro, la edad y los años de servicios de los actuales, son casi desconocidos por la comisión.

Y no es, señor presidente, que sea un fenómeno peculiar á este momento de la República Argentina la dificultad de tratar esta materia tan transcendental.

En la sesión celebrada por la sociedad de economía política de París, el 5 de junio, hace unos días, estudiando el proyecto de ley de retiros para obreros, que estaba discutiendo hace poco tiempo el parlamento francés, proyecto elaborado sobre la ley de retiros de obreros alemana, monsieur Charles Letort concluía su conferencia pronunciándose sobre los cálculos, recursos y cargas de la ley, con estas palabras: «Todo esto es desconocido; la experiencia sólo podrá enseñarnos las consecuencias de una concepción tan monumental como peligrosa.»

Monsieur Rochetin, en el *Journal des économistes* de 15 de mayo de 1901, trata también la cuestión de la dificultad sobre este problema, y dice refiriéndose á la ley de retiros que se está discutiendo en el parlamento francés: «Hé aquí, pues, llegada por fin á la orden del día esta famosa cuestión de los retiros con su cortejo de apreciaciones erróneas, de cargos financieros, de pasiones interesadas inseparables de todo gran proyecto de orden social; porque cuando alguno de nuestros representantes—no todos felizmente—ponen en movimiento el poder del estado, se ven surgir las concepciones más osadas y más temerarias, puesto que aquí la responsabilidad de las consecuencias, en caso de fracaso, no incumbe ni á la personalidad de los iniciadores ni colectivamente á los mandatarios de la nación... Es la nación misma la que, teóricamente, discute y delibera por el órgano de sus representantes; y sin embargo, no hay cuestión que ponga en juego más intereses y responsabilidades del punto de vista del presupuesto, que la que nos ocupa en este momento.»

Penetrado de esta gravedad y de la transcendencia de esta cuestión, y confesando las dificultades, la comisión empieza por declarar á la cámara, sin ningún ambaje, que el proyecto de ley que se discute no puede ser, por la falta de antecedentes serios, sino una ley de ensayo. Por más importante que sea este proyecto de ley, no se puede presentar de otra manera; y siendo esto así, para aprovechar de la experiencia



de los demás pueblos y suplir con ella en parte nuestras dudas y vacilaciones, la comisión se preocupó de averiguar los antecedentes que existen en la legislación comparada.

Me voy á permitir darlos, aunque sea someramente, para que se vea qué nos dicen las naciones más experimentadas, más viejas, con un personal administrativo inmensamente superior por su número, al nuestro, y cómo han resuelto esta cuestión de las pensiones y jubilaciones.

Empezaré por la Gran Bretaña, que ha dictado las leyes de julio de 1824, abril de 1859, junio de 1871 y mayo de 1872. Las leyes de 1869, 1870, y, sobre todo, la *commutation act* de 1871, permiten reemplazar las pensiones por la entrega de una suma proporcional pagada de una sola vez. La pensión es calculada á razón de 1/60 del sueldo por año de servicio hasta 40/3, sin poder pasar de 2/3, necesitando el empleado tener la edad de 60 años cumplidos para poder jubilarse.

La ley de 25 de julio 1834, sobre pensiones civiles, ordenaba el descuento de 2 1/2 á 5 % de los sueldos; pero él fué suprimido por la ley de 17 de agosto de 1857. El sueldo medio que debía tenerse en vista para la pensión, era el de los últimos 3 años. A los 50 años de servicio, la pensión era igual al sueldo. No hay pensión para la viuda y huérfanos. Salvo caso de enfermedad, nadie puede jubilarse antes de los 60 años. El servicio mínimo para la jubilación es de 10 años.

En Prusia existen las leyes de 30 de abril de 1825 y 27 de mayo de 1872. Allí, después de 10 años, por incapacidad física, la tasa de la jubilación es de veinte ochenta avas partes hasta el máximo de 60 avas partes por año, ó las tres cuartas partes del sueldo de que gozaba el empleado. Ninguna pensión puede pasar de quince mil francos, ni nadie puede jubilarse sin que exista una causa de inutilidad real, ó presunta por edad. Tampoco hay pensión para las viudas y huérfanos, aunque existen cajas especiales en las que se descuenta una parte del sueldo destinada á las viudas y huérfanos.

En Austria, la ley de 14 de mayo de 1893, descuenta el tres por ciento y da á los empleados, á los diez años de servicios, el 40 por ciento del sueldo, que se eleva de diez en diez años por cuotas de veinte por ciento. De manera que á los cuarenta años de servicios,

se les acuerda la jubilación con sueldo íntegro.

En Bélgica existen las leyes de 21 de julio de 1844, 17 de febrero de 1899, 8 de abril de 1857 y 15 de enero de 1886. Se descuenta el seis, treinta y cinco por ciento del sueldo. La jubilación se concede á los sesenta y cinco años de edad y treinta de servicios. El término medio de la jubilación es una ochenta y cinco avas parte del sueldo de los últimos cinco años, y no puede pasar de las dos terceras partes del sueldo último, ni de cinco mil francos anuales.

En los Países Bajos existe la ley de 1865, en virtud de la cual se concede la jubilación á los cuarenta años de servicios. La tasa de la jubilación es de una sesenta avas partes por año con un máximo de dos terceras partes del último sueldo. Para los profesores, es de uno y treinta y cinco avas partes. El máximo de la jubilación es de cuatro mil florines para los ministros y de tres mil para los demás empleados. El descuento es de tres por ciento. Tampoco hay pensión para las viudas y huérfanos; pero existe una caja especial destinada á ese objeto.

En Italia hay pensiones ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias por las leyes orgánicas del reino, las extraordinarias votadas por acontecimientos políticos ó por motivos de reconocimiento nacional. La ley que legisla sobre jubilaciones es la de 1864, y acuerda la jubilación á los sesenta y cinco años de edad con cuarenta años de servicios ó á los veinticinco años de servicios en caso de enfermedad. El máximo de la jubilación es de ocho mil liras ó cuatro quintas partes del sueldo. La tasa es de una cuarenta avas partes para los sueldos menores de dos mil liras y de una sesenta avas partes para los que pasen de esa cantidad. La pensión para las viudas y huérfanos es de una tercera parte de la jubilación. Las extraordinarias son votadas, como aquí, por el congreso. Es muy conocida la ley que se refiere á los mil de Marsala, y es sabido que en 1879 alcanzaban á 6.793 pensionistas, con 3.305,732 francos anuales. Véase si tenía razón el poder ejecutivo cuando en 1887, decía que parecía una enfermedad de los pueblos latinos esto de aumentar extraordinariamente el número de las clases pasivas.

Alemania tiene la ley de 21 de abril de 1886, que concede la jubilación después de diez años de servicios y siempre en caso de inutilidad, con quin-

ce sesentaavas partes del sueldo, que de año en año se eleva con una sesenta avas partes más; pero que en ningún caso puede pasar de las tres cuartas partes del sueldo. No se tienen en cuenta los servicios prestados antes de los veinte años de edad. La ley de 17 de mayo de 1897 da el cuarenta por ciento del sueldo como pensión á la viuda del funcionario. Si la viuda tiene quince años menos que el marido se le reduce la pensión. Los alemanes, que son hombres prácticos,—mi distinguido colega y amigo el señor diputado Olivera (siento que no esté presente) podría encontrar en esto algún argumento filosófico para su proyecto de divorcio—se preocupan de la tranquilidad de los matrimonios y si tiene la esposa quince años menos que el marido, le reducen la pensión; si está casada más de cinco años se la aumentan; si se casa tres meses antes de la muerte del funcionario con el fin de obtener la pensión, caduca su derecho. Si se casa después del retiro, no tiene derecho alguno. Todo empleado puede ser retirado de oficio, con 65 años de edad ó incapacidad. Para atender las pensiones de las viudas y las de los huérfanos hay un descuento de tres por ciento á los funcionarios.

Después, por la tendencia que se nota en la legislación alemana hacia el socialismo, se han dictado leyes de seguros obligatorias, que obligan á ciertas categorías de empleados, como la ley de 28 de mayo de 1885, á asegurarse contra los riesgos de la vejez y de la invalidez.

En España, el país clásico de las pensiones y jubilaciones, como lo dije al principio, hay una gran confusión en materia de leyes de pensiones y jubilaciones. Tal es la confusión, que no podría informar sobre cuál es la ley vigente. Revisando el diccionario de Alcubilla, donde se encuentran todas estas leyes, he visto que figuran más de setenta páginas de letra menuda que contiene la legislación desde 1835 hasta la fecha. Pero entre esas leyes, la de 1855, establece 60 años; la del '66, 65, contra la voluntad del empleado, y 60 en los otros casos; negando todo derecho á los que ganen menos de ochocientos escudos anuales. El máximo de la pensión que autoriza es diez mil pesetas.

El desarrollo que han tenido en España las jubilaciones y pensiones está demostrado por los presupuestos. El de 1885 asigna para atender estos servicios 49.640,818 de pesetas; el de 1893, pese-

tas 54.151,200. Por el presupuesto de 1892 se establece, en vista de los abusos y del incremento enorme que las jubilaciones habían alcanzado, que nadie podrá jubilarse antes de la edad de sesenta y cinco años, salvo caso de inhabilitación y en tal caso, por 20 años de servicios acuerda dos quintas partes del sueldo; por 29 años, tres quintas partes; por 35 años, cuatro quintas partes.

«La legislación sobre clases pasivas es ya, desde hace mucho tiempo, dice Alcubilla, y va siéndolo cada vez más, un verdadero laberinto, tan dificultoso como el de Creta, si bien no tan admirable como aquel otro, que mereció de Plinio la calificación de *portentissimum humani ingeni opus*; éste, el de Creta, el de Samnos, el de Clusium y otros de que nos hablan la historia y la mitología, serán mucho menos célebres que nuestra legislación de clases pasivas.

»El crecimiento constante de la partida consignada en nuestro presupuesto por clases pasivas, la confusión que reina en este asunto, las anomalías que producen, las disposiciones vigentes, fueron los motivos que indujeron á pensar en la reforma y á encargarla con urgencia; pero pasaron los dos meses y han pasado cerca de tres años, y pasarán muchos más y el proyecto no se formuló; seguirán la confusión y las desigualdades y las anomalías, y como hasta aquí el objetivo de todo empleado público será conspirar, desde que lo es, para alcanzar lucrativos destinos y buen sueldo, regulador».

Parece que estas palabras de Alcubilla fueran escritas para nosotros y para nuestros empleados!

No es un misterio para nadie que cada uno de los señores diputados ha sido constantemente solicitado desde que se despachó este proyecto, para influir á fin de que se votara tal ó cual artículo en esta ú otra forma, porque así se favorecía el interés de determinado empleado.

Y la actitud de los empleados actuales de la República ha llegado á tal extremo, que á un miembro de la comisión de legislación le han hecho pedir por intermedio de uno de sus pequeños hijos, que mandaba á la escuela, la reforma de la ley en un sentido determinado, para que gozara un cierto gremio de empleados de beneficios mayores que los que les acuerda el proyecto. De manera que—siento mucho tener que declararlo—«el empleado, como dice Alcubilla, no se preocupa principalmente sinó de

alcanzar lucrativos destinos y buen sueldo regulador».

No quiero fatigar á la cámara leyendo las ideas que emite este mismo autor sobre las clases pasivas en el tomo segundo de su diccionario, página 533, donde dice que es aterrador el problema para España si no se pone remedio al desarrollo constante de las pensiones y jubilaciones en aquel país, donde hubo un tiempo que por el mero hecho de ser ministro de estado durante una hora, se adquiriría el derecho á cuarenta mil pesetas anuales de pensión.

En los Estados Unidos no hay leyes de pensiones sino para los militares.

Ya me he referido hace un momento á la enorme suma que allí se invierte en pensiones. No hay más ley de jubilaciones, si tal puede llamarse, que la

del año 69, sobre los jueces, que determina que los miembros de la suprema corte y los jueces pueden retirarse á los setenta años de edad y diez de servicios, con sueldo íntegro.

Pero, señor presidente, la verdad es que todos los autores de economía política llaman la atención sobre el modo como han crecido las pensiones en Estados Unidos: el año 1880, 56.000,000 de dollars; el año 1888, 88.500,000; el año 1890, 95.000,000 y el año 1883, como ya lo dije á la cámara, 158.740.467.

Ahora, agradecería, señor presidente, un cuarto intermedio antes de pasar á ocuparme de la legislación francesa.

—Se pasa á cuarto intermedio siendo las 4 y 45 p. m.